

República de Colombia



Rama Judicial

Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca

Informe secretarial: Arauca (A), 27 de septiembre de 2023, en la fecha paso al Despacho del señor Juez el presente expediente, para decidir sobre aprobación de conciliación extrajudicial. Sírvasse proveer.

Julio Melo Vera
Secretario

Arauca (A), 29 de septiembre de 2023

Medio de control	:	Conciliación Extrajudicial
Radicación	:	81-001-33-33-002-2023-00210-00
Demandante	:	Eby Patricia Reina de Acua
Demandado	:	Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Providencia	:	Auto Aprueba Conciliación
Consecutivo	:	00902

ANTECEDENTES

El 24 de agosto de 2023 la señora Eby Patricia Reina de Acua, a través de apoderada judicial, presentó solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual correspondió a la Procuraduría 26 Judicial II para Asuntos Administrativos de Arauca. La parte convocada fue la Nación -Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el objeto de conciliar sobre lo siguiente:

PRETENSIONES

*“1. Declarar la nulidad del **acto ficto o presunto negativo** configurado **27 de agosto de 2021**, originado con la petición radicada el **27 de mayo de 2021** en cuanto la **Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio** negó a mi demandante el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la ley 1071 de 2006.*

2. Como consecuencia de la anterior petición, se ordene el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006.

3. igualmente, se ordene el reconcomiendo, liquidación y pago de la indexación de la suma solicitada en el numeral segundo, desde la fecha de pago de las cesantías y hasta la fecha de pago efectivo de la sanción moratoria”.

HECHOS

Del escrito conciliatorio y sus anexos se extraen los siguientes:

- El 29 de agosto de 2018 la señora Eby Patricia Reina de Acua solicitó el reconocimiento de cesantías, las cuales fueron reconocidas por medio de la Resolución No 634 de 15 de noviembre de 2018; dichas cesantías fueron pagadas el 26 de febrero de 2019.
- El día 27 de mayo de 2021 se radicó ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Petición tendiente a obtener reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la cesantía establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006. Sin obtener respuesta expresa, sino negativa ficta.

Del trámite conciliatorio

Una vez llegada la fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial el 20 de septiembre de 2023, la parte convocante reiteró las pretensiones consignadas en la solicitud de conciliación presentada, las cuales fueron transcritas previamente en esta providencia.

Por su parte, la entidad convocada propuso el acuerdo que se detalla a continuación, que fue aceptado por la convocante.

“Fecha de solicitud de las cesantías: 29/08/2018

Fecha de pago: 18/02/2019

No. de días de mora: 69

Asignación básica aplicable: \$ 3.197.767

Valor de la mora: \$ 7.354.848

*Valor Pagado por vía administrativa /según lo informado po Fiduprevisora S.A.):
\$ 4.359.763*

Valor de la mora saldo pendiente: \$ 2.995.085

Propuesta de acuerdo conciliatorio: \$ 2.995.085 (100%)

*Tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación: 1 MES
(DESPUÉS DE COMUNICADO EL AUTO DE APROBACIÓN JUDICIAL). No se
reconoce valor alguno por indexación.*

*La presente propuesta de conciliación no causará intereses entre la fecha en que
quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se
haga efectivo el pago.*

Se paga la indemnización con cargo a los títulos de tesorería de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) y el Decreto 2020 de 2019, y de acuerdo con la adición presupuestal de \$440.000.000.000 aprobada por el Consejo Directivo de FOMAG en sesión ordinaria de 9 de diciembre de 2019” (Negrillas fuera del texto original).

Finalmente, con la remisión a este Despacho del acta del acuerdo conciliatorio y los anexos que lo soportan para efectos de control de legalidad, se entiende que el Agente del Misterio Público avaló ese acuerdo.

CONSIDERACIONES

Marco normativo

El artículo 3 de la Ley 2220 de 2022, establece que la Conciliación:

“La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian.”.

Igualmente, el artículo 89 de la misma normativa preceptúa que las personas jurídicas de derecho público pueden conciliar total o parcialmente, siempre que o este expresamente prohibida por la ley. Veamos:

“En materia de lo contencioso administrativo serán conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley.

Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado. (...)”.

A su vez en este mismo artículo, señala que:

“(...) Podrá acudirse a la conciliación extrajudicial sin que medie una intención de demanda y podrá ser presentada de común acuerdo por las partes de un eventual conflicto. (...)”.

Aunado a lo anterior, el artículo 92 de la misma ley y el artículo 161 num. 1º de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al referirse a los requisitos previos para demandar

establece la conciliación extrajudicial en la jurisdicción contencioso administrativa así:

“(...) cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales (...)”

Requisitos para aprobar los acuerdos conciliatorios judiciales o extrajudiciales

Los requisitos que se deben cumplir a efectos de otorgar aprobación a los acuerdos conciliatorios son los siguientes:

1. Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.
2. Que las entidades estén debidamente representadas y que los apoderados que actúen en representación de las mismas cuenten con facultad expresa para conciliar.
3. Que el medio de control por el que sea tramitado el asunto no tenga caducidad.
4. Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrojado a la actuación.
5. Que el acuerdo conciliatorio se ajuste al ordenamiento legal y no vulnere ninguna norma jurídica.
6. Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.
7. Que el acuerdo conciliatorio contenga una obligación clara, expresa y exigible.

En este mismo sentido, ha dejado claro la jurisprudencia que, la conciliación en materia contencioso administrativa y su posterior aprobación debe estar respaldada con elementos probatorios idóneos y suficientes respecto del derecho objeto de controversia, por estar en juego el patrimonio estatal y el interés público, de manera que con el acervo probatorio allegado, el Juez de conocimiento no tenga duda alguna acerca de la existencia de la posible condena en contra de la administración y que por lo tanto, la aprobación del acuerdo conciliatorio resultará provechoso para los intereses de las partes en conflicto.

Lo anterior resulta coherente con las condiciones que en materia de conciliación extrajudicial administrativa, expresa el Decreto compilatorio 1069 de 2015, artículo 2.2.4.3.1.1.8 cuando dispone que “*Las pruebas deberán aportarse con la petición de conciliación, teniendo en cuenta los requisitos consagrados en los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil*”, cuyas normas regulan el modo como deben allegarse las pruebas documentales al proceso, en este caso la conciliación extrajudicial (Art. 245 CGP) y los casos en los cuales tales documentos adquieren valor probatorio (Art. 246 *ibídem*).

Es de advertir que, los anteriores requisitos deben obrar en su totalidad dentro del acuerdo extrajudicial, pues la sola falta de uno de ellos conllevaría necesariamente a su no aprobación, quedando relevado el operador judicial de estudiar la existencia de los demás, dada la naturaleza de inseparabilidad de los mismos.

Del caso concreto.

Analizados los aspectos jurídicos de la conciliación, procede el Despacho a verificar si se cumplen o no los requisitos legales para dar o no, aprobación a la presente conciliación, realizando el análisis comparativo entre los requisitos enlistados *ut supra* con la conciliación bajo estudio, de lo que se concluye:

1. Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.

Se tiene que la Litis se contrae a una discusión de tipo económico de solución disponible para las partes, pues lo perseguido por la parte convocante es el pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 1071 de 2006, por el no pago oportuno de las cesantías parciales.

2. Que las entidades estén debidamente representadas y que los apoderados que actúen en representación de las mismas y cuenten con facultad expresa para conciliar.

Se constata que la parte convocante estuvo debidamente representada en la audiencia de conciliación por su apoderada sustituta, la abogada Lina Fernanda Marciales Galindo, a quien el abogado principal, el doctor Yohan Alberto Reyes

Rosas le sustituyó las mismas facultades a ella conferidas, dentro de las que se encontraba expresamente la de conciliar.

Por su parte, la parte convocada mediante escritura pública otorgó a la abogada Sandra Milena Burgos Beltrán, poder general para ejercer su defensa judicial, reservándose el derecho para conciliar. Por ello, en ejercicio de esa potestad el comité de conciliación y defensa judicial del Ministerio de Educación Nacional autorizó conciliar, según consta en la certificación suscrita por su Secretario Técnico el 07 de septiembre de 2023; documento que fue aportado en la diligencia conciliatoria por la abogada Lina Lizeth Cepeda Rodríguez, a quien la abogada principal, le sustituyó las mismas facultades a ella conferidas. Con ello cual se establece el cumplimiento de este requisito.

3. Que el medio de control por el que sea tramitado el asunto no esté afectado de caducidad.

Para abordar este punto, lo primero a considerar es que el medio de control por el que eventualmente se tramitaría esta actuación, sería el de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero al ser el acto administrativo, potencialmente demandado, un acto ficto con efectos negativos, no operan los términos de caducidad según lo dispuesto en el numeral 1 literal d del artículo 164 del CPACA.

4. Que el acuerdo conciliatorio se ajuste al ordenamiento legal y no vulnere ninguna norma jurídica.

El acuerdo conciliatorio se encuentra ajustado a derecho, por cuanto la conclusión a la que han llegado tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado es que, los docentes oficiales son también destinatarios de la ley 1071 de 2006, y por ello, son beneficiarios de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas y parciales¹, adicional a las consideraciones que se expondrán a continuación.

¹ Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 2017 y Consejo de Estado - Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018. Radicación No. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15), M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.

5. Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrimado a la actuación.

En lo que concierne al plazo a partir del cual se genera la sanción moratoria, es necesario remitirse a los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006, los cuales preceptúan:

“ARTÍCULO 4o. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”. (Negrillas fuera de texto).

Al tenor de lo dispuesto en la norma anterior, el plazo para pagar las cesantías parciales o definitivas en principio son 60 días, sin embargo, a ese plazo es necesario sumarle los días de ejecutoria del acto administrativo que las decide oportunamente² - 5 días si la petición se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984 o 10 días si la petición se hizo en vigencia del CPACA-. Aquí se precisa que el plazo de ejecutoria correrá una vez se realice la notificación del acto administrativo que reconoce las cesantías conforme al CPACA o al anterior CCA, depende del caso.

² El término de ejecutoria había sido definido a través de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2007 (IJ) Rad. 7600123310002000-02513-01.

Frente a las hipótesis que se pueden presentar en relación con el reconocimiento de las cesantías y el momento en que se genera la mora en su pago, el Consejo de Estado en sentencia de unificación contempló las siguientes³:

Nº	Hipótesis	Notificación	Corre ejecutoria	Término pago cesantía	Corre moratoria
1	Petición sin respuesta	No aplica	10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto	45 días posteriores a la ejecutoria	70 días posteriores a la petición
2	Acto escrito extemporáneo (después de 15 días)	Aplica, pero no se tiene en cuenta para el computo del término de pago	10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto	45 días posteriores a la ejecutoria	70 días posteriores a la petición
3	Acto escrito en tiempo	Personal	10 días, posteriores a la notificación	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la notificación
4	Acto escrito en tiempo	Electrónica	10 días, posteriores a certificación de acceso al acto	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la notificación
5	Acto escrito en tiempo	Aviso	10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso	45 días posteriores a la ejecutoria	55 días posteriores a la entrega del aviso
6	Acto escrito en tiempo	Sin notificar o notificado fuera de término	10 días, posteriores al intento de notificación personal ⁴	45 días posteriores a la ejecutoria	67 días posteriores a la expedición del acto
7	Acto escrito	Renunció	Renunció	45 días después de la renuncia	45 días desde la renuncia
8	Acto escrito	Interpuso recurso	Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve	45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria	46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso
9	Acto escrito, recurso sin resolver	Interpuso recurso	Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso	45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria	61 días desde la interposición del recurso

Por otra parte, el salario que se tomará para la liquidación de la sanción moratoria de las cesantías definitivas será el vigente al momento del retiro del servicio; mientras que, en el caso de las cesantías parciales, será el vigente en que ocurra la mora⁵ sin que varíe aun cuando comprenda varios años, y el monto ascenderá a un día de salario por cada día de retardo, hasta que se realice el pago, de acuerdo con el artículo 5 parágrafo de la ley 1071 de 2006.

En esos términos, el acuerdo conciliatorio sobre el pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales estaría respaldado jurídicamente, por ser la convocante una docente oficial y por habersele pagado las cesantías parciales por fuera del plazo legal. En efecto, en el caso concreto,

³ Consejo de Estado - Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018. Radicación No. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15), M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
⁴ Se consideran los supuesto de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cuales, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días.
⁵ Consejo de Estado - Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018. Radicación No. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15), M.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.

la solicitud de pago de cesantías parciales, la resolución mediante la cual se ordenaron, fueron las que a continuación se relacionan:

Fecha de Solicitud de cesantías	Respuesta a Solicitud, N° de Resolución	Notificación del Acto Administrativo	Puesta a disposición pago cesantías
29 de agosto de 2018 ⁶ (Parciales)	FPSM 634 del 15 de noviembre de 2018	No se allegó prueba	18 de febrero de 2019 (según certificación de la Fiduprevisora) ⁷

Al no haber prueba de la notificación del acto administrativo que reconociera las cesantías parciales, el plazo máximo del que disponía el FOMAG, para pagarlas era de 70 días contados a partir del día siguiente a la petición de pago, según la hipótesis No. 2 desarrollada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación, puesto que se trató de una petición presentada en vigencia del CPACA, en la cual el acto administrativo que resolvió favorablemente la petición de reconocimiento y pago de las mismas fue expedido extemporáneamente, esto es, por fuera de los 15 días siguientes a la solicitud.

Así las cosas, los 70 días para pagar las cesantías parciales vencieron el día 10 de diciembre de 2018. En cuanto a la fecha de su consignación, se observa una diferencia en la documentación aportada. En efecto, la parte demandante en su escrito conciliatorio refiere que el pago fue el 26 de febrero de 2019. Por su parte, la entidad convocada en el certificado del comité de conciliación (fl. 14 del documento 1. SOLICITUD del archivo 02 del Exp. Digital) señala que la fecha de pago fue el 18/02/2019. Se encuentra que la transacción que reposa en el recibo del banco BBVA (Fl. 15 del documento 1. SOLICITUD del archivo 02 del Exp. Digital) se realizó el 18 de febrero de 2019; y por su parte, el certificado emitido por la FiduPrevisora indica que el dinero quedó a disposición del docente el 18 de febrero de 2019 (Documento 12 Archivo 02 del Exp. Digital).

Frente a esas fechas se descarta, de plano, tomar la que esgrime el convocante por la simple razón de que no es la fecha en que la docente retira el dinero del banco la determinante para hacer cesar la sanción moratoria. Es la fecha en que la entidad realiza transacción del dinero, puesto que es en ese momento cuando cumple con su obligación de deudor. Si se admitiera que es cuando se entrega el dinero en el banco, claramente estaría supeditado a una acción del docente y la

⁶ Esta fecha se extrae de la Resolución No. FPSM-634 del 15 de noviembre de 2018.

⁷ Esta Fecha se extrae del documento 1. SOLICITUD del Archivo 02TrámiteConciliaciónExtrajudicialProcuraduria.zip del expediente digital

sanción se extendería indefinidamente hasta cuando este a bien fuere a retirar el dinero.

Se observa en el plenario recibo de transacción del Banco BBVA del día 26 de febrero de 2019, el cual corresponde al retiro de los dineros de la entidad bancaria por parte de la convocante. Bajo esa óptica, la fecha en que realizó el pago de las cesantías la entidad fue el 18 de febrero de 2019, cosa distinta es que el retiro del dinero haya ocurrido el 26 de febrero. En tal sentido, es el 18 de febrero de 2019, la fecha en que cesó la causación de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales. De modo que, las fechas de inicio y finalización de la sanción moratoria que el acuerdo conciliatorio tuvo en cuenta fueron las correctas.

Bajo la anterior consideración, los días de mora fueron 69 días, si se cuentan en días calendario, tal como lo hizo la entidad en la propuesta conciliatoria.

En este caso, el salario para liquidar la sanción por mora corresponde al devengado por el convocante en el año 2018, al ser el año en que se causó la respectiva mora y que ascendía a la suma de \$3.641.927 ⁸.

Así, es cierto que ha existido una mora desde el 10 de diciembre de 2018 al 17 de febrero de 2019, por lo que habría lugar al reconocimiento y pago de la sanción moratoria en razón a un día de salario por cada día de retardo con base en el salario mencionado, tal como lo acepta el Ministerio de Educación.

6. No lesividad al patrimonio público

En lo que respecta al requisito según el cual el acuerdo conciliatorio no puede ser lesivo al patrimonio público, considera el despacho que también se cumple, por las siguientes razones:

Dado que se estableció que los días de mora fueron 69, resultan congruentes los valores pactados, pues la asignación básica de la convocante al momento de la mora era de \$ 3.197.767 y que la operación aritmética en razón a un día de salario por cada día de retardo arroja un valor de \$ 7.354.848 del cual, la entidad

⁸ Valor en el que coinciden las partes en el escrito de solicitud de conciliación extrajudicial y la certificación suscrita por el Secretario Técnico del comité de conciliación y defensa judicial del Ministerio de Educación Nacional.

manifiesta en su fórmula de arreglo que pagó \$ 4.359.763. Declaración que fue aceptada por la parte convocante en el acuerdo de conciliación. Por lo tanto, se tomará como cierta y, en consecuencia, el saldo restante asciende a \$2.995.085, siendo este el que fue objeto de conciliación en este acuerdo, sobre el cual se decide.

Al respecto, se aclara que el Despacho frente al tema objeto de estudio en múltiples sentencias ha sostenido, y aun lo hace, la tesis según la cual el cómputo de los días de mora se toma en días hábiles ⁹. Pese a ello, la propuesta por la entidad convocada de contabilizarlos como calendario se acoge en el presente caso como una interpretación posible y razonable, de hecho, es la postura que sostiene el Tribunal Administrativo de Arauca. Ello, partiendo de que, a pesar de que se concilió sobre el 100% del valor de la mora en todo caso, se materializa el principio de economía y celeridad procesal, lo cual evita correlativamente, un desgaste en la administración de justicia; de ahí que no se avizore lesividad en el acuerdo frente a este aspecto.

Aunado a ello, no se pactó reconocimiento de pago alguno por indexación y se acordó que no se causarían intereses entre la fecha en que quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se haga efectivo el pago.

7. Que el acuerdo conciliatorio contenga una obligación clara, expresa y exigible.

Por último, el acuerdo conciliatorio contiene una obligación clara, expresa y exigible, por cuanto el mismo se encuentra contenido en documento, establece la parte acreedora y deudora, los valores a pagar debidamente liquidados, también determina una fecha de pago, la forma en que se realizará el mismo.

En ese orden de ideas, se impartirá aprobación al acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes, tal y como se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

⁹ En virtud a los siguientes razonamientos:

- De acuerdo con el arts. 4 y 5 de la ley 1071 de 2006, los días que se toman en cuenta para que opere la mora en el pago de las cesantías son hábiles, de manera que si la mora subsiste en el tiempo debe computarse de la misma forma, es decir, en días hábiles.
- Según el art. 62 en concordancia con el 59 de la ley 4 de 1913 “Sobre régimen político y municipal”, cuando se fijen plazos en días, deberán suprimirse los feriados y las vacantes, a menos de que se exprese lo contrario. De modo que, como la sanción corresponde a un día de salario por cada día de mora, sin que se haya especificado que el día mora debía entenderse día calendario, es aplicable esta norma.
- Computar la sanción moratoria con días hábiles, resulta menos lesivo al patrimonio estatal y de igual de forma se cumple la finalidad de la sanción, que de ninguna manera es enriquecer al beneficiario de ella y empobrecer a la entidad deudora.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Arauca,

RESUELVE:

Primero: **Aprobar** el acuerdo conciliatorio extrajudicial al que llegaron la Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la convocante Eby Patricia Reina de Acua en la audiencia del 20 de septiembre de 2023 llevada a cabo ante la Procuraduría 26 Judicial II para Asuntos Administrativos de Arauca, por lo expuesto en la parte motiva.

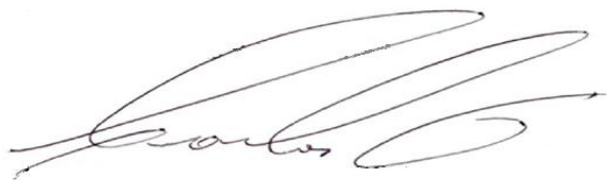
Segundo: La Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la convocante Eby Patricia Reina de Acua, darán cumplimiento al acuerdo conciliatorio conforme a lo pactado en el mismo.

Tercero: El acta de acuerdo conciliatorio con sus documentos, anexos y el presente auto aprobatorio, debidamente ejecutoriado, presta mérito ejecutivo y tienen efectos de cosa juzgada.

Cuarto: Por Secretaría, expídanse las copias que soliciten las partes, con observancia de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del CGP.

Quinto: En firme la presente decisión archívense las diligencias, realizando las anotaciones a que haya lugar y también las pertinentes en el Sistema informático SAMAI.

Notifíquese y Cúmplase,



CARLOS ANDRÉS GALLEGO GÓMEZ
Juez